

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA CONJUNTA

28 de septiembre de 2017
Índice: ASA 16/7194/2017

Los Estados miembros de la ONU deben actuar para presionar a Myanmar para que ponga fin a los crímenes de lesa humanidad.

Declaración conjunta de 87 organizaciones de la sociedad civil

Nuestra coalición mundial de 87 organizaciones de la sociedad civil hace un llamamiento urgente a los Estados miembros de la ONU para abordar los abusos contra los derechos humanos y la catástrofe humanitaria en los que se encuentra sumida la población rohingya de Myanmar. El secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado de las ONU para los derechos humanos, Zeid Raad al Hussein, han calificado de limpieza étnica la campaña que las fuerzas de seguridad de Myanmar están llevando a cabo contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine. A medida que aparecen más pruebas, resulta evidente que las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad estatales de Myanmar constituyen crímenes de lesa humanidad. La ONU y sus Estados miembros deben emprender acciones urgentes.

Instamos a las delegaciones de la ONU, en especialmente a las de los 114 países comprometidos con el Código de Conducta para la Respuesta del Consejo de Seguridad en Casos de Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra (ACT) —que prometieron apoyar “acciones oportunas y decisivas” para prevenir o poner fin a la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra—, a realizar esfuerzos para aprobar una resolución en la Asamblea General de la ONU en la que se aborde la situación; y pedimos al Consejo de seguridad de la ONU que estudie las medidas que se han de imponer al gobierno de Myanmar.

Más de 400.000 rohingyas han huido a Bangladesh a través de la frontera desde el 25 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad myanmaras pusieron en marcha operaciones en respuesta a los ataques coordinados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) en el estado de Rajine. Estas operaciones —en las se han cometido de forma generalizada homicidios, saqueos e incendios provocados, y se han colocado minas terrestres— han tenido como consecuencia la destrucción masiva de más de 200 pueblos, según las imágenes de satélite y las declaraciones de testigos presenciales. Decenas de miles de personas de otras minorías étnicas también han quedado desplazadas a consecuencia de la violencia.

Las enérgicas condenas que han realizado la ONU y los dirigentes mundiales no han puesto fin a las atrocidades de Myanmar. En el discurso inaugural que dirigió al Consejo de Derechos Humanos el 11 de septiembre, Al Hussein señaló que en 2016 había “advertido de que la constante de violaciones graves de los derechos humanos de la población rohingya parecía indicar un ataque generalizado o sistemático contra esta

comunidad, y podría equivaler a crímenes de lesa humanidad". Las organizaciones de la sociedad civil han advertido de que la campaña de las fuerzas de seguridad de Myanmar llevan a cabo desde el 25 de agosto contra la población rohingya constituye un crimen de lesa humanidad. Es fundamental que los miembros de la ONU emprendan acciones concretas y ejerzan presión directa sobre los dirigentes civiles y militares de Myanmar.

Hasta hace poco, la Unión Europea (UE) era la principal patrocinadora de una resolución anual sobre los derechos humanos en Myanmar en la Asamblea General de la ONU. El año pasado, la UE decidió poner fin a estos esfuerzos, incluso en medio de la violencia gubernamental contra la población rohingya que comenzó en octubre de 2016. Ahora, instamos a los miembros de la UE a trabajar con la Organización para la Cooperación Islámica y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, así como con otros Estados interesados, para reactivar esta resolución como medio de lograr una actuación decisiva por parte de la Asamblea General de la ONU en respuesta a la gravedad de la situación en curso en el estado de Rajine y la crisis humanitaria y derechos humanos que se está desarrollando.

En la resolución de la Asamblea General se debe exigir el fin inmediato de los abusos contra los derechos humanos, que los organismos de ayuda humanitaria tengan acceso inmediato y sin trabas a las poblaciones necesitadas, y que la misión investigadora autorizada por el Consejo de Derechos Humanos (con sede en Ginebra) pueda acceder a Myanmar y desplazarse por el país sin restricciones para investigar los presuntos abusos contra los derechos humanos en todo el territorio. También se debe exigir que las autoridades myanmaras se comprometan a garantizar que toda la población rohingya y otras poblaciones refugiadas e internamente desplazadas puedan regresar a su lugar de origen de manera segura, voluntaria y digna, y a dismantelar la discriminación y segregación institucional de la población rohingya y otras comunidades musulmanas del estado de Rajine, que constituye el contexto de la actual crisis. En la resolución también se debe instar a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de la ONU a explorar posibles vías para hacer que comparezcan ante la justicia los perpetradores de crímenes graves de derecho internacional.

También instamos a los miembros del Consejo de Seguridad a ejercer más presión sobre las autoridades myanmaras estudiando seriamente opciones tales como un embargo de armas contra las fuerzas armadas y sanciones financieras selectivas contra las personas responsables de crímenes y abusos graves contra los derechos humanos.

Todos los Estados miembros de la ONU interesados también deben estudiar las medidas bilaterales, multilaterales y regionales que pueden tomar para ejercer más presión sobre el gobierno myanmaro. En particular, pedimos a todos los Estados que suspendan de inmediato la asistencia y la cooperación militares con Myanmar.

Si los gobiernos, las personas que ocupan altos cargos en la ONU y el personal diplomático se limitan a reunirse y a pronunciar discursos mientras en Myanmar continúan las atrocidades, asumen el riesgo de no utilizar todos instrumentos diplomáticos a su alcance para poner fin a la campaña de limpieza étnica y otros crímenes de lesa humanidad. Ante las destrucciones masivas, los homicidios y el desplazamiento de cientos de miles de personas, la inacción no debe ser una opción.

Firmantes:

AFL-CIO
American Jewish World Service
Amnistía Internacional
ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)
Asociación Pro Derechos Humano - Peru (APRODEH)
Asylum Access
Avaaz
Burma Campaign, Reino Unido
Burma Human Rights Network (BHRN)
Burma Task Force
Burmese Rohingya Organisation, Reino Unido
Canadian Centre for the Responsibility to Protect
Centro para Civiles en Conflicto (CIVIC)
Center for Development of International Law
Christian Solidarity Worldwide
Coalition for Justice and Accountability (COJA)
Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons (CRSP)
Council for Humanitarian Networking of Sheikul Islam Office
CREDO Action
Cross Cultural Foundation (CRCF)
Development and Justice Initiative, India
Equal Rights Trust
Fortify Rights
Foundation for Rural Development (FRD)
Front Mahasiswa
Genocide Watch
Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)
Global Progressive Hub
Human Rights and Development Foundation (HRDF)
Human Rights Now
Human Rights Watch
Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI)
Institute for Asian Democracy
Institute on Statelessness and Inclusion
International Campaign for the Rohingya
International Coalition for the Responsibility to Protect
International Detention Coalition
Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
Proyecto de Justicia Internacional
International Organization for Victim Assistance
International State Crime Initiative
Islamic Society of North America (ISNA)
Jewish Alliance of Concern Over Burma
Jewish Council for Public Affairs
Jiyan Foundation for Human Rights

Justice Centre Hong Kong
Maryknoll Office for Global Concerns
Migrant 88
Migrant Working Group (MWG)
Grupo para la Defensa de los Derechos de las Minorías
Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies
Consejo Nacional de Iglesias
National Religious Campaign Against Torture
Odhikar
Pan African Lawyers Union's (PALU)
Partners Relief & Development
Pemuda Anti Kekerasan Aceh
Persatuan Darul Fitrah Terengganu
Persatuan Ulama Kedah
Physicians for Human Rights
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
Progressive Voice Myanmar
Society for the Promotion of Human Rights Malaysia (PROHAM)
Refugees International
Centro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformista
Restless Beings
SANRIM
SHARP, Pakistán
Society for Rights of Indigenous People of Sarawak
Society for Threatened Peoples, Alemania
STAND, Canadá
STAND: The Student-Led Movement to End Mass Atrocities
Suaka Indonesia
Swedish Burma Committee
The Arakan Project
Iglesia Episcopaliana
The Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights
The Stanley Foundation
Ummatee
Union for Reform Judaism
Unitarian Universalist Service Committee
United Nations Association, Reino Unido
US Campaign for Burma
Win Without War
Movimiento Federalista Mundial - Canadá
Movimiento Federalista Mundial - Instituto de la Política Global
Yateem TV